

Alejandro Miguel Schneider*

El presente artículo apunta a explicar el peso y el accionar de la clase trabajadora entre 1963 y 1966 durante la presidencia de Arturo Illia. En general, el período sólo ha sido enfocado en el ámbito de las negociaciones y las presiones de la dirigencia gremial. Pero ésta es una perspectiva incompleta. La relevancia y el poder que gozó la cúpula laboral se debieron, precisamente, a la capacidad de movilización de sus bases. Por otra parte, dicha característica fue también tenida en cuenta, a la hora de las decisiones políticas, por los restantes actores sociales; más aún, en los prolegómenos del golpe de Estado de 1966.

En este sentido, tanto los representantes sindicales como los distintos grupos dominantes observaron con particular atención el comportamiento de la clase obrera. Esto no se debió sólo a que ésta tuvo un peso decisivo en el peronismo, hecho que incidió gravemente al calor de sus disputas internas, sino también a que sus reivindicaciones económicas fueron un fuerte obstáculo para la burguesía en su proceso de optimización del capital. Como consecuencia, a diferencia de los estudios historiográficos tradicionales, este ensayo examina el proceder de los trabajadores (en especial, su práctica gremial) y su intervención en la vida política del país durante esos años.

I.

El derrocamiento del general Juan Domingo Perón, en 1955, abrió en el sistema político argentino una situación de fuerte inestabilidad. Para 1963 el panorama no era alentador. Las elecciones de julio de ese año expresaron, una vez más, la crisis institucional que transitaba el país. El candidato presidencial de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illia, triunfó en esos comicios con el 25,8% de los sufragios. Más allá de los resultados electorales había un problema mayor: los radicales del pueblo eran el sostén civil de los oficiales Colorados, pero el Ejército estaba en manos de la conducción de los Azules.

* Doctor en Historia. Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata.

El apoyo con que contó Illia al comienzo de su mandato, pronto se desvaneció. Transcurridos unos pocos meses de gobierno, su administración se encontró aislada. Las características de la gestión y la forma en que había llegado al poder no ocultaron los verdaderos motivos políticos y económicos que contribuyeron a generar un rápido desgaste de su presidencia. En líneas generales, las primeras causas fueron las más evidentes: cómo contener y encauzar al movimiento obrero en una Argentina que no podía proporcionar las respuestas aplicadas en la década de 1940. A esto se añadió una fuerte incertidumbre sobre el papel que debería desempeñar el peronismo (y el propio líder exiliado) como mayoritario representante de la clase trabajadora. Todo ello enmarcado en un nuevo contexto internacional liderado por los Estados Unidos y la Doctrina de Seguridad Nacional. No menos importante, combinada con la situación política, se planteó una segunda cuestión estructural: las discusiones sobre hacia dónde había que orientar el modelo de acumulación de capital. Este problema implicaba resolver qué fracción de la burguesía se beneficiaba y el modo en que ésta consensuaba su proyecto de país con el resto de su clase y lo imponía al conjunto de la sociedad. En este contexto, desde sus inicios, el gobierno de Illia tuvo que responder a la crisis recesiva que se remontaba a 1961. La caída registrada en el ámbito secundario era muy pronunciada. De este modo, problemas tales como la subocupación laboral, el sobreempleo y los atrasos en el pago de los salarios, entre otros, afectaban al conjunto de los trabajadores.

Con esta perspectiva de fondo, los paros, los trabajos a reglamentos y -sobre todo- las ocupaciones fabriles expusieron el malestar reinante en el movimiento obrero. En ese marco, un sector de activistas, que participaban en comisiones internas y cuerpos de delegados, comenzaron a manifestar su descontento. En líneas generales, las acciones se desplegaron al margen de la cúpula sindical; por ejemplo, en Otis Elevadores (San Fernando), Remington Rand (Munro), Ryrsa (Ciudadela y Avellaneda), Autoar (Carupá), etcétera. En este último evento, los operarios no sólo protestaron contra la empresa por la deuda salarial mantenida tras noventa días de suspensiones, además, denunciaron a la dirigencia de la seccional Vicente López de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que amparó “las arbitrariedades” por medio del “silencio”, la “inoperancia” ante los hechos y por su “sociedad” en los “negociados” de la firma. Pero, sin duda, fueron las ocupaciones de fábrica -ante las cuantiosas suspensiones y despidos- las que signaron la tónica de ese período. Por ejemplo, entre otras, en Kaiser y Pullmania. En la primera, la medida de fuerza se llevó a cabo con rehenes; además, la producción se mantuvo en manos de los

trabajadores. Ante la contundencia de la misma, la compañía se comprometió a cancelar el cierre de la empresa, finalizando de ese modo la ocupación. En forma reiterada, esta clase de protesta -para tener efectividad- se desarrolló con el empleo de rehenes. Dicha metodología planteó como necesidad inmediata, en numerosas oportunidades, la negociación (por la situación del personal retenido) antes que el desalojo policial. Este panorama también se expresó en la toma de la fábrica Pullmania. En ella, sus operarios la ocuparon (demorando al plantel jerárquico) a raíz del atraso en el pago de las quincenas y por la actitud de la firma de despedir a casi toda la comisión interna cuando comenzó el enfrentamiento. Tras el desalojo, de regreso en la misma, los que no fueron sancionados declararon un paro de brazos caídos en el interior del establecimiento; mientras que en la calle, los cesantes se movilizaron visitando los talleres de los alrededores para buscar el apoyo de los obreros de la zona. Ante la persistencia del conflicto, los empleadores optaron por reincorporar a todos los despedidos y abonar los salarios adeudados. Vale resaltar que el hecho se desplegó y, un dato no menor, triunfó independientemente de la participación de la jefatura de la seccional Capital Federal de la UOM.

Estos embates y el consecuente desenvolvimiento de la dirigencia sindical sugieren algunas observaciones. En primer término, el contenido y el avance de las protestas matizan la afirmación enunciada en la historiografía acerca del férreo control que ejerce la cúpula en el movimiento obrero, como opinan, entre otros, Rodolfo Walsh, Jorge Correa y Daniel James.¹ En segundo lugar, las prácticas de negociación y de presión gremial deben entenderse como una respuesta que sirvió para canalizar el enojo existente entre los trabajadores. En gran medida, este proceder se aprovechó para encauzar las demandas sociales y también para pelear espacios de poder (en los casos de Augusto Vandor, Andrés Framini, Eleuterio Cardozo) ante potenciales líderes laborales. De la pesquisa efectuada, emergen serios indicios para considerar que estos dirigentes, en forma permanente, emplearon las medidas de fuerza para dirimir sus propios proyectos políticos. En otras palabras, su conducción real distaba de tener el carácter monolítico que se desprende de la lectura de obras como *¿Quién mató a Rosendo?*, de Walsh. Un tercer aspecto a tener en cuenta fue que este modo de intervención ayudó a cristalizar un factor de poder que operó con un proyecto autónomo en la arena política. Para conquistar dicho dominio, los representantes obreros no dudaron en enfrentarse con los otros grupos dominantes y contra

¹ Rodolfo Walsh. *¿Quién mató a Rosendo?* (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1986); Jorge Correa. *Los jerarcas sindicales*. (Buenos Aires: Ed. Obrador, 1974) y Daniel James. *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. (Buenos Aires: Sudamericana, 1990).

Perón. Dentro de esa pugna, Vandor intentó erigirse como el hombre rector del justicialismo, impugnando el liderazgo del general exiliado. Por último, la conducta de la burocracia se la debe analizar en un contexto donde se puso en discusión, y se disputó, la potestad institucional de los sindicatos argentinos: la ley de Asociaciones Profesionales. El gobierno de Illia intentó resquebrajar a las 62 Organizaciones alentando a los gremios Independientes para que conformaran una central paralela a la CGT. Las tratativas iniciales, el progreso y las derivaciones del Plan de Lucha -primordialmente, su segunda etapa- fueron una muestra acabada y sintética de cómo se plasmaron estos temas.

II.

Desde los inicios de la gestión presidencial de Illia, los dirigentes de la central obrera mantuvieron una ronda de encuentros con miembros de su gabinete a fin de dialogar sobre una serie de reclamos como la aprobación del salario vital mínimo y móvil, la derogación de la legislación represiva, el esclarecimiento del caso de Felipe Vallese, la sanción de una amplia amnistía, entre otras cuestiones. Sin embargo, al fracasar las reuniones mantenidas entre representantes de ambos sectores, se dispuso concretar una primera medida de fuerza. Ésta consistió en un paro general de seis horas, el 6 diciembre, junto con una concentración frente al Congreso Nacional. Semanas más tarde, ante la falta de acuerdo en las conversaciones mantenidas con el gobierno radical, la CGT anunció la continuación del Plan de Lucha, iniciado durante la presidencia de José M. Guido, junto con la composición de sus diferentes etapas.² Análogamente a este anuncio, la cúpula sindical comenzó una ronda de diálogos con partidos políticos y con organizaciones empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General Económica (CGE). Aunque los empleadores coincidieron con determinadas críticas que expuso la dirigencia laboral (amén de sus intereses particulares), quedó explícitamente manifiesto que no compartían el tipo de enfrentamiento propuesto.

Los llamados de alerta no cayeron en saco roto. La central sindical se movió en forma cautelosa durante varias semanas, evitando disponer un enfrentamiento donde ella también resultara perjudicada; se temía que la acción, por su dinámica, pudiese llegar a objetar su propia existencia. Tampoco se soslayaron las conversaciones con el Poder

² La primera etapa del Plan de Lucha de la CGT se llevó a cabo durante el mes de mayo de 1963.

Ejecutivo para negociar los reclamos pedidos en diciembre. Producto de estas tratativas y de las divergencias en el seno de la CGT, las medidas se fueron postergando en el tiempo.

Todo esto estuvo signado por un notable incremento en el número de protestas, muchas de ellas activas, con altos niveles de movilización, comparados con los primeros meses del año 1963. El aumento del costo de vida, la recesión y la presencia de un gobierno débil, sostenido por variables muy frágiles, determinaron -en gran medida- el accionar obrero. El verano de 1964 comenzó siendo, en términos laborales, muy agitado. Se produjeron una serie de pequeños enfrentamientos, independientes de la dirigencia gremial, que reclamaron -principalmente- una mejor recomposición salarial al calor de la renovación de los convenios colectivos de trabajo. En contraste con el período estival anterior, los conflictos se concentraron en la búsqueda de homologar beneficiosos pactos laborales. Como corolario, el Ministerio de Trabajo, en manos de Fernando Solá, presionó a las cámaras empresariales para que concedieran aumentos y se evitaran medidas de fuerza; sin embargo, esto no siempre se consiguió.

Un segundo motivo de reclamo se generó ante la demora ocasionada en el pago de haberes. En numerosas circunstancias, producto de estos enfrentamientos (por lo general, paros parciales) los empresarios respondieron con despidos, hecho que agravaron las quejas. Por este motivo se ocuparon los establecimientos fabriles de Ryrsa (Ciudadela), AVAN (San Miguel), DKW (San Martín) y Aceros Sima (Villa Martelli), entre otros, obteniendo la defensa de los cesanteados y el cobro de los haberes atrasados.

Ésas no fueron las únicas fábricas que anticiparon la segunda etapa del Plan de Lucha. En abril, los operarios de Álvarez y Pinillo (San Justo) ocuparon las instalaciones. Al igual que en otros escenarios, la medida se inició ante los despidos arbitrados por los empleadores a raíz de un conflicto gremial. Ante ello, la delegación de los metalúrgicos de La Matanza declaró el “estado de alerta y movilización” para todos los trabajadores de su área de influencia. Además, en el transcurso del conflicto dispuso la ejecución de una serie de paros de dos y cuatro horas, por turno, en dichos establecimientos. Semanas más tarde, la empresa reincorporó a los obreros cesanteados.³ Hubo enfrentamientos que alcanzaron significativos niveles de conciencia y organización. En Construcciones Electromecánicas Especiales de San Martín, la ocupación con rehenes (que devino tras los despidos generados por las protestas que se hicieron por el cobro de quincenas adeudadas) fue garantizada con una amplia gama de medidas que previnieron un posible desalojo policial. Por ende se dispuso:

³ *La Razón*, 7 de abril y *Compañero* N°42, 14 de abril de 1964.

electrificar (con generadores propios) una alambrada que circundaba la manzana de la planta, rodear los automóviles de los empleadores con garrafas, soldar las puertas de la fábrica, colocar camiones como trincheras y fabricar bombas molotov. Al personal detenido se lo encerró en pequeñas habitaciones donde “debían recoger diariamente sus colchones y marchar con ellos al hombro”. Por su parte, la seccional San Martín de los metalúrgicos acompañó la medida de protesta con paros de media hora por turno durante esas jornadas. Luego de cinco días, la empresa abonó de contado, en el sindicato de la UOM, el dinero adeudado en concepto de salarios.⁴

En medio de este convulsionado panorama, el 1º de mayo, el Confederal de la CGT estableció el calendario de la segunda etapa del Plan de Lucha que se debía practicar entre mayo y junio. Mientras la conducción de la central obrera ultimaba los preparativos para llevar adelante el enfrentamiento, no descartaba su interrupción si se alcanzaba un compromiso con el gobierno. En respuesta, el primer mandatario, a fin de detener la futura protesta, impulsó la sanción de la ley del salario mínimo, vital y móvil. Por su parte, el empresariado, ante la oleada de conflictos, acentuó la presión sobre el presidente Illia.

Las ocupaciones con rehenes no sólo fueron un problema en cuanto a un claro perfil simbólico, al alterarse la habitual disciplina patrón-obrero por la de obrero-patrón, sino que existieron otros argumentos más profundos. Por lo menos, se destacaron dos aspectos. El primero fue que en ellas se ponía en discusión la propiedad privada y la puesta en producción de las empresas; el segundo, la posibilidad que la medida en sí misma engendrara un proceso de difícil sujeción.

III.

En este contexto se inició la segunda etapa del Plan de Lucha. La central laboral, para lograr efectividad en el enfrentamiento, decidió dividir el territorio nacional en ocho regiones geográficas; la planificación de las ocupaciones estuvo en directa correspondencia con cada una de estas zonas. Ahora bien, los analistas que describieron estas acciones estimaron que comenzaron el 21 de mayo; en realidad, esto no fue así. Siguiendo la crónica de los diarios de esa fecha, la medida de fuerza empezó tres días antes, el 18 de ese mes. En dicha jornada, la protesta tuvo una breve duración; en pocas horas, los lugares ocupados

⁴ *La Razón*, 4 de mayo; *Compañero* N°43, 21 de abril y N°46, 12 de mayo de 1964.

fueron desalojados.⁵ Comparado con los operativos “oficiales” de lucha, estas tomas presentaron una débil repercusión. Dos posibles hipótesis, que no son excluyentes entre sí, explican “el fracaso” de este hecho. La primera es que los enfrentamientos iniciales reflejaron las dudas y las divisiones existentes en el seno de la confederación gremial entre las 62 Organizaciones y los Independientes. Una razón alternativa es que los dirigentes buscaron ilustrar al gobierno, a través de una pequeña muestra, en lo concerniente a su capacidad de organizar y movilizar a la clase obrera.

El jueves 21 de mayo se dejaron a un lado las negociaciones y la incertidumbre que imperaba en la sociedad. Ese día comenzó el primer operativo de la CGT, con la ocupación de ochocientos establecimientos en diferentes barrios de la Capital Federal, el conurbano bonaerense y algunas localidades del interior del país. Cerca de medio millón de trabajadores textiles, químicos, metalúrgicos, aceiteros, fideeros, mecánicos, albañiles, obreros navales, entre otros, sincronizaron la medida de fuerza con eficacia.⁶

El miércoles 27, en cumplimiento de las medidas dispuestas, hubo una nueva jornada de lucha, con similares técnicas, en establecimientos fabriles y comerciales de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca y otras ciudades del país.

El tercer operativo se desplegó dos días más tarde, afectó a 650.000 trabajadores de 1.100 establecimientos; éstos tuvieron lugar en Capital Federal y en la zona sur y oeste del conurbano bonaerense. La cuarta jornada, el 2 de junio, quedó centralizada en torno del transporte público: ferroviarios, aeronáuticos, marítimos y portuarios.

De manera análoga al progreso de estas fases del Plan de Lucha, obreros de distintos gremios continuaron llevando a cabo diversas protestas. Durante el mes de mayo, los mecánicos de Ford Motor (General Pacheco) efectuaron paros totales y parciales a raíz de que la terminal despidió cerca de veinte operarios. En tanto, en Vicente López, los empleados municipales -principalmente, los recolectores de residuos- enfrentaron, mediante paros, la propuesta del intendente de privatizar este tipo de servicios. A pesar de haber recibido una fuerte represión, la huelga se extendió por cerca de tres semanas. Su extensa duración, en parte, se explica por la importante solidaridad recibida por el resto de los trabajadores públicos de esa intendencia así como también por la del distrito de San Isidro. Además, al margen de las disposiciones y del organigrama planificado por la central

⁵ Durante esa jornada las ocupaciones fueron muy breves, entre otros establecimientos, en el frigorífico Guayco de Capital Federal y en una fábrica de armas en Punta Alta. *La Razón*, 18 de mayo de 1964.

⁶ Confederación General del Trabajo. *Ocupación por 3.913.000 trabajadores de 11.000 establecimientos en las 2 etapas del Plan de Lucha de la C.G.T. Argentina*. (Buenos Aires: 1964).

sindical, hubo numerosas ocupaciones de fábricas y tomas de universidades que no estuvieron previstas y que emergieron como corolario de esta medida de fuerza.⁷ Así, la confederación laboral informó en un comunicado:

“La CGT no puede expresar en forma individual la cantidad de adhesiones que espontáneamente llegan [...] pudiendo agregarse el entusiasmo de obreros no comprendidos en la zona demarcadas han sobrepasado todos los límites previstos por la central obrera en cuanto a ocupaciones se refiere, ya que podemos anticipar que en diversos puntos de la Capital Federal, en particular zonas céntricas, gremios no comprendidos en esta operación, o establecimientos que no figuraban en la nómina, han sido ocupados espontáneamente por sus trabajadores. Constituyéndose en el más firme mentís a informaciones oficiales de que las acciones estaban solamente instrumentadas por los dirigentes.”⁸

En este marco, diferentes grupos de poder -concretamente, los empresarios- clamaron contra las ocupaciones fabriles y criticaron la pasividad del Poder Ejecutivo. Éste, frente a la protesta, adoptó disímiles respuestas: continuar con las conversaciones con la cúpula de la CGT, usar la represión en el desalojo de ciertos establecimientos y procesar judicialmente a obreros y dirigentes gremiales.

A causa del cariz y la trascendencia que tomaron los acontecimientos, en los primeros días de junio, se reunió el Comité Central Confederal con la participación de los delegados regionales. Aunque las discusiones se llevaron a cabo a puerta cerrada, los temas que se trataron fueron de conocimiento público. Entre otros, se debatió el riesgo que acarrearía la instrumentación de medidas jurídicas contra la cúpula directiva que, en la sesión de enero, programó el Plan de Lucha; también, se entrevió la posibilidad que se intervinieran los sindicatos o, peor aún, la central madre. Paralelamente a ello, se discutió la unidad con el sector de los Independientes. Estos gremios, desde antes de la ejecución de los operativos, objetaron la modalidad de las ocupaciones; además, durante todo ese tiempo, mantuvieron diálogos estrechos y amigables con la presidencia de Illia. De este modo, debido a la cercanía gubernamental, los Independientes se retiraron del Consejo Directivo aduciendo sus discrepancias. Por último, no menos importante, se deliberó sobre la dinámica que conllevaba este tipo de enfrentamiento. Más allá de si los dirigentes gremiales estaban alineados en el sector “duro” o “blando”, conocían las secuelas que

⁷ Por ejemplo, los operarios del frigorífico Wilson ocuparon la planta pese a la oposición de sus dirigentes. *Palabra Obrera* N°362, 2da quincena de mayo de 1964.

⁸ *La Razón*, 27 de mayo de 1964. Corresponde observar que, si bien es cierto que surgieron acciones independientes de los trabajadores, el Plan de Lucha no se entiende sin tener presente la fuerte coordinación de los dirigentes cegetistas.

podía acarrear este método de lucha y práctica obrera, y su posible evolución. Por otro lado, esta visión no proviene de un mero análisis académico, sino que los propios dirigentes sindicales fueron conscientes de sus consecuencias. El secretario gremial y de interior de la CGT, Avelino Fernández, opinó:

“La toma de fábricas fue la medida más extrema que pudimos tomar. Después de eso ya no nos quedaba nada por hacer, porque de seguir adelante, lo único que nos faltaba, prácticamente, era cuestionar el poder.”⁹

A este diagnóstico de la evolución de la medida de protesta se añadieron la voz de alarma y la intervención mediadora de la jerarquía de la Iglesia Católica. Ésta, a través de una exhortación del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Caggiano, a los dirigentes gremiales, empresarios y autoridades nacionales, expresó:

“Temo que rápida y peligrosamente nos estemos acercando al punto crítico en que la tensión social puede estallar poniendo en peligro la paz pública [...] Todavía estamos a tiempo para evitar errores graves que podrían costar sangre y llevarnos a lo imprevisible.”¹⁰

El prelado, durante cerca de dos semanas, trató de mediar extraoficialmente entre las partes. Más allá del resultado de la conciliación de posturas, la conducción ampliada del Comité Central Confederal decidió atenuar la medida de fuerza. En su reunión del 15 de junio cambió los planes originales propuestos el 1º de mayo (llevar a cabo una toma de establecimientos -en todo el país- por 24 horas entre el 15 y el 18 de junio) por otro designio más leve: saldar las protestas en forma zonal y gradual, los días 18 y 24 de junio.

Tal como fue dispuesto, el día 18, los trabajadores ejecutaron el sexto operativo del Plan de Lucha; tuvo un fuerte acatamiento en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y La Plata. Participaron 850.000 trabajadores de casi tres mil establecimientos. En contraste con las anteriores jornadas, varios testimonios aludieron a que en ella hubo una mayor presencia e intervención policial para desalojar a los obreros ocupantes a pedido del Poder Judicial.¹¹ Mientras que el 24 de junio se concretó la última jornada prevista por la dirección cegetista. En ella participaron alrededor de 1.150.000 trabajadores y se ocuparon más de cuatro mil centros de producción, transporte y comercio.

⁹ Reportaje a Avelino Fernández. Osvaldo Calello y Daniel Parceró. *De Vandor a Ubaldini*. (Buenos Aires: CEAL, 1984), p.83.

¹⁰ *La Nación*, 31 de mayo y *La Razón*, 5 de junio de 1964.

¹¹ Ante la brutal represión policial ejercida contra los trabajadores de SIAT, durante el sexto operativo, los obreros de la seccional UOM de La Matanza realizaron paros de una hora por turno en señal de protesta. *La Razón*, 18 y 23 de junio de 1964.

En esa jornada, al igual que en la anterior, se evidenciaron demostraciones policiales de corte represivo para desalojar las fábricas. En el caso de Siam (Monte Chingolo) los obreros recurrieron al sonido de las sirenas de la planta solicitando el apoyo de los vecinos del barrio, quienes concurren al lugar y evitaron el desalojo del establecimiento; por su parte en Philips (Capital Federal) los operarios soldaron las puertas de acceso, detrás de ellas pusieron los tubos de aparatos de televisión, a la vez, alertaron a la empresa que ésta se hacía responsable de su eventual rotura.¹²

IV.

En síntesis, la segunda etapa del Plan de Lucha, según el documento oficial emitido por la central obrera, se ejecutó de la siguiente forma:

Fecha	Operativo	Establecimientos ocupados	Trabajadores comprendidos
21-5-64	Nº1	800	500.000
27-5-64	Nº2	1.200	600.000
29-5-64	Nº3	1.100	650.000
2-6-64	Nº4	750	150.000
3-6-64	Nº5 –“A”	60	8.000
4-6-64	Nº5 –“B”	40	5.000
18-6-64	Nº6	2.950	850.000
24-6-64	Nº7	4.100	1.150.000
Total		11.000	3.913.000

Fuente: Confederación General del Trabajo. *Ocupación por 3.913.000 trabajadores de 11.000 establecimientos en las 2 etapas del Plan de Lucha de la C.G.T. Argentina.* (Buenos Aires, 1964), p.5

Más allá de las cifras proporcionadas, el análisis de esos hechos permite discernir otros asuntos que emergieron durante esas semanas. Uno de los componentes que más destacaron, tanto cronistas contemporáneos como investigadores posteriores, fue el alto grado de planificación, precisión y clandestinidad que conllevaron las ocupaciones. La dirección gremial dispuso, para que la protesta fuese efectiva, que los establecimientos encargados de ejecutar la medida no se conocieran hasta último momento, para mantener el

¹² *Compañero* Nº53, 30 de junio y *Palabra Obrera* Nº364, 30 de junio de 1964.

carácter sorpresivo y conspirativo; recién entonces, se entregaban los “sobres cerrados” a las comisiones internas y los cuerpos de delegados que instrumentaban la toma.

Numerosos analistas explicaron la efectividad de la protesta gremial por el férreo control que poseyó la conducción de las 62 Organizaciones. Este aspecto fue subrayado tanto por testigos contemporáneos a los acontecimientos como posteriores a él. La revista *Panorama* reflexionó que

“la agresiva aplicación del Plan de Lucha de la CGT fue sentida por gran parte del país como un temible recurso de los militantes más activos del peronismo, para intentar la recuperación del poder. [...] Su Plan de Lucha, consistente en la ocupación de fábricas y establecimientos laborales, se cumplió con justeza matemática. Ni un desajuste, ni una vacilación, ni una demora. ‘Nosotros no lo hubiéramos hecho mejor’, nos confesó, no sin cierta preocupación un observador militar.”¹³

El éxito de la medida de fuerza no solamente respondió a este factor, intervinieron otros componentes. En realidad, hubo ocupaciones que presentaron un alto grado de autonomía gremial. En los hechos se condensó la experiencia adquirida desde la Resistencia y -en fecha más reciente- de las tomas fabriles realizadas, independientemente de la cúpula sindical, desde el segundo semestre de 1962. Aunque los aspectos específicos de cada proceso variaron, como es lógico, de un establecimiento a otro, resulta pertinente identificar elementos comunes; entre éstos, uno de los más significativos fue el quiebre de la disciplina fabril. En reiteradas oportunidades, los empleadores se refirieron a esta problemática. De hecho, el trabajo en cualquier unidad de producción, por lo general, conlleva un alto grado de sometimiento y de obediencia hacia el capital.

Si bien todos los métodos de lucha implicaron una alta cuota de organización y de disciplina para que se llevaran a la práctica, la ocupación fue el tipo de enfrentamiento donde estas cualidades se hicieron más necesarias. No se trataba de una “simple” toma de establecimiento, para lo cual había que planificar la vida de los obreros y rehenes mientras se estaba adentro. Tareas tales como las guardias, la autodefensa, la búsqueda de comida y su posterior distribución, la divulgación del acontecimiento y el pedido de apoyo a las fábricas y los barrios adyacentes, fueron labores imprescindibles que se debían contemplar para que la protesta resultara efectiva. La ocupación, junto con una sólida unidad para la acción, requería una amplia democracia obrera, por medio de reuniones permanentes, para obtener un cabal convencimiento de las tareas que se llevaban a cabo. Las fuentes y los

¹³ *Panorama* N°15, agosto de 1964.

testimonios consultados ilustraron, en muchas ocasiones, el “estado de asamblea” que reinaba durante un conflicto. Además, las iniciativas de un operario podían ser mejores que la de un delegado; éstas consolidaban -en su dinámica- el funcionamiento de la medida de fuerza.

Un fenómeno que estuvo presente no sólo en estas ocupaciones sino también en otras, previas y posteriores, a las jornadas de la protesta cegetista fue la iniciativa obrera de continuar con el proceso de producción. Por otra parte, algunas tomas se extendieron un par de días después de finalizado el operativo, con el objetivo de resolver cuestiones pendientes que estaban al margen de los reclamos del Plan de Lucha. La idea de que se propagase la insubordinación de los trabajadores fabriles al conjunto de la sociedad fue un fenómeno que tuvo un grave impacto en esos años. Así, la clase dominante derivó conclusiones concretas de esas jornadas de protesta. El editorial redactado por el periódico empresarial *Mundo Metalúrgico* fue claro en ese discernimiento:

“Asistimos con estupor a una serie de episodios insólitos, que tienen su origen en la programación y puesta en práctica, con toda impunidad, de un plan de lucha instrumentado por la CGT y que cuenta en su favor con total pasividad de las autoridades y empresarios. [...] Ante estos hechos, que no vacilamos en calificar de subversivos, las autoridades nacionales se limitan a observar acontecimientos y la justicia a llenar folios de papel.”¹⁴

Por último, el despliegue de los operativos permitió una participación notable de los militantes y activistas de izquierda. A pesar del vandorismo, la gimnasia de tomas de fábricas, aun conducidas por la CGT, tuvo un efecto de politizar -por momentos- a muchos trabajadores hacia posturas radicalizadas. No sólo por la experiencia, también porque una actitud combativa generaba espacios y puntos de contacto con los militantes, posibilitando la labor de este espectro ideológico. En síntesis, coincidiendo con Guillermo O’Donnell, fue alarmante la capacidad de acción de la clase obrera, que podía movilizarse hacia metas diferentes de las declaradas por la entidad cegetista y

“la no menos preocupante espontaneidad con que algunas bases habían tendido a rebalsar -sobre todo mediante la toma de rehenes y algunos casos de gestión obrera de las fábricas ocupadas-, las consignas de aquellos dirigentes.”¹⁵

V.

¹⁴ *Mundo Metalúrgico* N°207, junio de 1964.

De manera inmediata a estos acontecimientos, las acciones dispuestas por la CGT produjeron opiniones encontradas tanto en el seno de la central obrera como en otros sectores de la sociedad. Como se ha observado, el *impasse* abierto por la cúpula laboral durante la marcha de los operativos en la primera quincena de junio de 1964, provocó la retirada de los Independientes del Consejo Directivo. A pesar de esta renuncia y sus públicos comunicados contrarios al Plan de Lucha, las bases de esas entidades continuaron acatando las restantes jornadas. Los trabajadores ferroviarios de los talleres de Remedios de Escalada, San Martín, Bahía Blanca, Córdoba y San Cristóbal, entre otros, siguieron con los planes impartidos por la confederación madre, prevaleciendo los intereses de unidad y la conciencia de clase sindical por sobre la conducta de los representantes gremiales.

Durante el mes de julio, a causa de la dimisión de los Independientes, se modificó la composición de los integrantes del secretariado nacional de la CGT. Simultáneamente, el 8 de ese mes se aprobó la tercera fase del Plan de Lucha que consistió en la ejecución de “cabildos abiertos” y movilizaciones callejeras. Como subrayan numerosos analistas y estudios del período, aunque desde heterogéneas perspectivas, la nueva etapa de protesta careció del vigor de las anteriores. Una posible hipótesis para explicar dicha situación se encuentra en el balance efectuado de las tomas fabriles. En este contexto, cobran sentido las palabras del secretario general José Alonso:

“[...] es necesario que todos sin excepción, gobierno, Fuerzas Armadas y partidos políticos se den cuenta de una vez por todas que no es hora de seguir peleando entre hermanos, devorándonos unos a otros, ya que las asechanzas de ideologías extrañas al espíritu y pensamiento argentino son una amenaza latente que golpea cerca. [...]

“La tercera etapa del Plan de Lucha, [es] un llamado al reencuentro nacional, un deseo de desarmar los espíritus, aquietar las pasiones y lograr mediante un intercambio de diálogo la comprensión y solución de los graves problemas que afectan al país.”¹⁶

A comienzos de agosto se iniciaron estos mítines en distintas ciudades del territorio. La cúpula gremial planteó como único punto de reivindicación el cumplimiento de las disposiciones en torno de la ley de salario mínimo, vital y móvil, y la puesta en marcha del Consejo Nacional encargado de su funcionamiento. *A posteriori*, al conocerse las órdenes de prisión preventiva contra ciento diecinueve miembros del Comité Central Confederal, por haber convocado al Plan de Lucha, se agregó la defensa de sus integrantes

¹⁵ Guillermo O'Donnell. *El Estado Burocrático Autoritario. Triunfos, derrotas y crisis*. (Buenos Aires: Ed. de Belgrano, 1996), p.77.

¹⁶ *Retorno. A una Patria Libre Justa y Soberana* N°9, 3 de septiembre de 1964.

a la lista de los reclamos. Las medidas de orden judicial no abarcaron únicamente a la cúpula directiva; en esas semanas se produjeron cerca de ocho mil procesos contra delegados gremiales por su participación en las ocupaciones fabriles. Paralelamente, hubo allanamientos a varios locales sindicales, entre otros, a la sede de la UOM y a la propia CGT. Ante esto, se pidió a la Cámara de Diputados la iniciación de un juicio político al juez Leopoldo Insaurrealde por haber ordenado la intervención al edificio de la calle Azopardo.

Los reclamos de contenido gremial se fueron diluyendo, mientras cobraron forma las argumentaciones políticas y las aspiraciones de Vandor. Las ocupaciones habían otorgado al dirigente metalúrgico un fuerte instrumento de negociación. No sólo frente al gobierno, las Fuerzas Armadas y el mundo empresario, sino también en las discusiones intrínsecas del peronismo, tanto en Buenos Aires como en Madrid. En una coyuntura donde el Poder Ejecutivo intentó legalizar al justicialismo, el sector conducido por Vandor se impuso, por comicios internos, en el aparato del partido sobre la tendencia de Framini. Ante el crecimiento de las huestes dirigidas por el metalúrgico, Perón aceptó -en forma circunstancial- que se estructurase una vertiente política radicalizada que hiciera frente al liderazgo del sindicalista. Así, el 5 de agosto se fundó el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) liderado, entre otros, por Gustavo Rearte, Héctor Villalón y Mario Valotta. Esta agrupación estuvo acompañada por un pequeño grupo de dirigentes gremiales que, en el plano interno de las 62 Organizaciones, se encontraron aislados y marginados.¹⁷

Al margen de estas disputas en el seno del justicialismo, Vandor se preocupó de que el movimiento participase en las elecciones parlamentarias del año 1965; producto de ello, la tercera etapa del Plan de Lucha se concentró en alentar el regreso del general exiliado. El Operativo Retorno permitió al sector que controlaba al peronismo avanzar en la integración de éste a los cánones de la democracia, mientras se buscaba descomprimir la protesta social. De esta manera, las prédicas reivindicativas pasaron a un segundo plano. En forma casi simbólica se desarrolló, a partir de fines de noviembre de 1964, una serie de manifestaciones callejeras como parte de la denominada cuarta fase del Plan de Lucha. Sus principales ejes de reclamo comprendieron desde la solicitud de créditos para las empresas industriales hasta la derogación de las leyes represivas. Tras una serie de escaramuzas, en diversas manifestaciones (la visita de De Gaulle, la celebración del Día de la Lealtad, el

¹⁷ Entre otros participaron Gustavo Rearte (Jaboneros), Atilio Santillán (Azucareros), Juan Jonsch (Teléfonos), Ricardo De Luca (Navales), Roberto Salar (Ceramista). *Compañero* N°59, 11 de agosto de 1964.

frustrado Operativo Retorno), la medida de fuerza de la CGT finalizó con un paro general de cuarenta y ocho horas el 17 y 18 de diciembre.

Por fuera de estos acontecimientos políticos, la clase obrera, durante la segunda mitad de 1964, siguió defendiendo sus derechos. Las principales preocupaciones se dieron alrededor de las suspensiones, los despidos, las negociaciones de los convenios colectivos junto con los pedidos de aumento en los haberes. El tipo de protesta no difirió con el empleado en los primeros meses del año. De todos ellos, en aquel momento descolló el conflicto de los trabajadores del frigorífico Smithfield de Zárate, que tuvo un importante desenlace tanto en el ámbito local como nacional.

El enfrentamiento se inició cuando la empresa despidió a setecientos operarios. Ante esta actitud, se decidió la ocupación reteniendo a setenta miembros del plantel jerárquico como rehenes. Durante la toma se erigieron barricadas, se circunvaló el predio con tanques, camiones y hierros. A las pocas horas, el pueblo de Zárate y otras ciudades adyacentes (Baradero, Campana) rodeó el establecimiento impidiendo con su presencia el desalojo por parte de la Prefectura Naval. Tres días después se acordó negociar la retirada, dejando sólo una guardia de cien obreros ante la negativa de la empresa de reabrirlo. Frente a esta situación de incertidumbre, meses más tarde se volvió a ocupar, y recibieron idénticos apoyos que la vez anterior. Tanto la comunidad de Zárate como las localidades vecinas participaron en multitudinarios actos de solidaridad. Sin embargo, hubo dos hechos que decidieron el triunfo del conflicto. El primero de ellos fue el masivo paro general de veinticuatro horas que realizó la población en la zona el trece de noviembre. El segundo fue la compra -por parte de los obreros y dirigentes de la seccional- de ganado en pie para su ulterior faenamiento y venta a precios irrisorios. De esta manera, el impacto fue notable. Los trabajadores (sin participación empresaria) hicieron funcionar el frigorífico y vendieron carne a muy bajo precio. A raíz de eso, semanas más tarde, lograron un compromiso con el gobierno provincial y la Corporación Argentina de Productores de Carne, por el cual se reabrió el Smithfield y se reincorporó al personal dejado cesante. A la par hubo otras ocupaciones fabriles de menor importancia como en Artinox (Tigre), Marubla (Capital Federal), Rydsa (Ciudadela), el frigorífico Lisandro de La Torre (Capital Federal), DKW (La Tablada), etcétera. También se produjeron paros parciales en diferentes gremios (textiles, ferroviarios, mecánicos) con el fin de renovar los acuerdos colectivos. Simultáneamente al posicionamiento experimentado en el seno de las 62

Organizaciones, y hacia el conjunto de los restantes factores de poder, los metalúrgicos acordaron una paritaria favorable en forma “rápida” y sin “apelar a medidas de fuerza”.

VI.

El fracaso del Operativo Retorno, como repararon analistas del período, benefició al proyecto de Vandor de liderar al justicialismo detrás de su figura. La imposibilidad de que el general regresase al país consolidó los planes de integrar al justicialismo en el seno del “juego democrático” imperante en la década de 1960. A medida que transcurrieron los años, se convirtió en una fuerte certeza que el peronismo era un fenómeno de la vida política argentina imposible de borrar. Durante la gestión de Illia, con ciertos límites, el movimiento fue admitido en la legalidad del sistema. La conversión del justicialismo en un partido oficial, al permitir que éste participase en los comicios de marzo de 1965, pretendió canalizar la protesta social y política dentro de los parámetros establecidos por la democracia electoral.

Luego del paro general de diciembre de 1964, el dirigente metalúrgico consolidó su posición en la CGT. En la tercera semana de enero de 1965 sesionó el Congreso Ordinario “Felipe Vallese” de la entidad madre; en él se renovaron las autoridades para el interregno 1965-1967, y también se acordaron otras cuestiones. La primera de ellas fue la alineación y consolidación del movimiento obrero organizado detrás del sindicalismo peronista de las 62 Organizaciones, resquebrajando el proyecto de los Independientes (que se habían retirado luego de la segunda etapa del Plan de Lucha) y del gobierno nacional de conformar una central laboral paralela. La presencia en este confederal de gremios que habían militado en las filas de los Independientes, como los ferroviarios, papeleros, marítimos y lucifuercistas, abortó la pretensión de constituir una nueva CGT.

En segundo lugar, luego de resolver los asuntos correspondientes a la unidad sindical, el Congreso emitió una declaración donde se mencionó la “vigencia” y la “necesidad” de proseguir con el Plan de Lucha, actualizándolo con los inconvenientes que sucedían en el país e incorporándole “nuevos objetivos”. En otras palabras, el comunicado anticipó el documento titulado *La CGT en marcha hacia el cambio de estructuras*, redactado por un equipo de sociólogos vinculados con José Alonso. No obstante su publicitada difusión, el folleto -que generó cuantiosas críticas dentro de la central- quedó relegado *a remotis*.

Posteriormente, el conjunto de las organizaciones gremiales peronistas se abocó a los comicios electorales de marzo para la renovación parcial de la Cámara de Diputados. Ante la negativa de la justicia electoral de otorgar la personería legal al Partido Justicialista, éste se presentó con las boletas de la Unión Popular. Éstas, digitadas en gran medida por el sector afín a Vandor, se integraron con un destacado número de dirigentes sindicales, entre otros, Paulino Niembro (UOM) y Gerónimo Izzeta (municipales de la provincia de Buenos Aires). A pesar de la restricción jurídica operada, estas listas obtuvieron un sustancial triunfo; en tanto, los radicales del pueblo quedaron derrotados. La victoria reafirmó el poder de las 62 Organizaciones, máxime, el de su titular. Como era de esperar, la consolidación de la cúpula laboral en el plano político, más aún en el ámbito parlamentario, reabrió con fuerza el latente conflicto entre el líder metalúrgico y Perón. A la sazón, casi un año, la disputa cruzó la vida interna del movimiento.

VII.

Durante 1965, la clase obrera continuó defendiendo su nivel de ingresos a través de numerosos enfrentamientos; especialmente, en el ámbito privado. El principal motivo de protesta se suscitó por la renovación de las paritarias. Las negociaciones implicaron discutir incrementos en los haberes según el aumento del costo de vida. En este sentido, las discusiones no fueron sencillas, esto explica el alto nivel de conflictividad y su extensa duración. Además, en forma concurrente, en las tratativas laborales se debatió la vigencia de los acuerdos establecidos. En muchas oportunidades, los gremios acompañaron el diálogo con el empleo de disímiles herramientas de lucha: predominaron los ceses de tareas por veinticuatro horas, los paros parciales sorpresivos con mezcladas modalidades de trabajo a reglamento. Éstos se dieron -en particular- entre los meses de febrero y abril. Empero, en los navales y en los jaboneros, la renovación se consiguió tras sucesivas semanas de inactividad.

Tampoco faltaron otras situaciones: los operarios del frigorífico Rioplatense (San Fernando) o los mecánicos de Ford Motor (General Pacheco) alcanzaron su mejora salarial -aparentemente- sin recurrir a algún tipo de acción directa. Por su parte, los metalúrgicos aumentaron sus jornales sin adoptar medidas de fuerza. El líder gremial llevó a buen término las conversaciones sólo con el anuncio y la amenaza -por medio de comunicados y la ejecución de asambleas- de usar alguna protesta. Lo notable fue que, en cierta manera, los empresarios aceptaban el “estilo” de Vandor. En ese pacto no sólo se obtuvo un

incremento superior al ofrecido por la Federación Argentina de la Industria Metalúrgica; también se logró que el 7 de septiembre fuera reconocido el Día del Trabajador Metalúrgico como jornada no laborable y paga. En ese contexto de diálogo cordial, la Federación manifestó “que el aumento concedido traduce el aumento del costo de vida operado en la fecha”; más aún, se consiguió un arreglo “como una necesaria actualización del salario obrero y como una contribución a la paz social que compromete a la responsabilidad empresarial.” Por su lado, el dirigente laboral emitió una declaración similar en *Mundo Metalúrgico*: en ella expresó su “satisfacción por el feliz término en la discusión del convenio”, ya que “ésta había sido difícil, pero dentro de un nivel de corrección, lealtad y comprensión mutua.”

Según los datos disponibles, un segundo motivo de resquemor fue originado en respuesta a las suspensiones y despidos dispuestos por distintas compañías. A eso se añadió otro factor actuante, que intervino de forma paralela a la problemática económica: en numerosas ocasiones las cesantías fueron secuelas de sanciones disciplinarias a raíz de conflictos previos. Hubo eventos de este tipo en navales, mecánicos, metalúrgicos, textiles y petroleros: la seccional Ciudadela de la UOM realizó paros en todos los establecimientos en solidaridad con los operarios de Ryrsa. En otras circunstancias, los ceses de tareas incluyeron gremios completos de una zona (Avellaneda y Lanús con los petroleros). La clase trabajadora enfrentó tales dificultades con sus acostumbradas herramientas de protesta. De las cuales se destacó el empleo de tomas fabriles.¹⁸ Dichas medidas tendieron a sobresalir en los primeros meses del año 1965, disminuyendo en forma abrupta durante su segunda parte. El disparador inmediato, en la mayoría de los ejemplos estudiados, se produjo como consecuencia de que las empresas sancionaban a sus operarios con despidos. De este modo la medida de fuerza surgía ante una actitud extrema, requiriendo para ello de una notable unidad de clase para su organización; su efectividad se adquiría mediante la ejecución de asambleas. Esto cobra trascendencia si se considera que las acciones se llevaron adelante en un contexto defensivo, determinado por los elevados índices de desocupación y por una dirección gremial nacional ajena a las preocupaciones de la base.

Este tipo de protesta también se produjo ante la demora en el cobro de sueldos. En Astarsa (Tigre), por dicho motivo, los obreros metalúrgicos ocuparon la planta y

¹⁸ En menor medida hubo algunas tomas que se iniciaron como medio de presión en demanda del cobro de haberes; aunque, la mayoría de las veces, estas protestas se hicieron a través de paros. Corresponde aclarar que, según los datos disponibles, esta última causa de reclamo fue el tercer tipo de malestar que originó los conflictos de 1965.

retuvieron, en calidad de rehenes, a cerca de treinta miembros del personal directivo y superior de la compañía. En resguardo de la medida de fuerza se dispuso el cierre con soldadura de las puertas de acceso, se enfocaron los reflectores hacia el exterior del establecimiento, se desplegaron las mangueras de incendio conectándolas con las calderas de agua hirviendo y se estableció un dispositivo para conectar las alambradas del cerco con cables de alta tensión. A pesar de la orden del juez de desalojar el predio, y que éste se encontraba rodeado por brigadas policiales de la unidad regional San Martín, la ocupación consiguió su cometido, después de cuarenta y ocho horas de espera la firma acordó pagar los jornales adeudados. No obstante, los enfrentamientos más relevantes de ese año lo llevaron a cabo los trabajadores azucareros que ocuparon los ingenios de la provincia de Tucumán.

VIII.

Al mismo tiempo que los obreros defendían a diario sus conquistas laborales, la corriente gremial liderada por Vandor debió resolver dos temas fundamentales. Por una parte, tuvo que enfrentar el intento del Ministerio de Trabajo de dividir al movimiento sindical. La doble táctica política del gobierno (de crear un sector adicto a su gestión y una estructura organizativa paralela a la CGT) se agudizó en 1965. Con ese designio se instrumentó una serie de medidas legales tales como el retiro de la personería jurídica a gremios identificados con ideas peronistas (Gastronómico, Caucho, Textil, Farmacia), la creación de otros (Trabajador de Subte) y el dictado de decretos reglamentarios de la actividad laboral. De estos últimos, el más importante fue el 969/66, de febrero de 1966, por el que se modificó la ley de Asociaciones Profesionales. Esta norma jurídica atacó el poder financiero de las entidades nacionales al disponer que las seccionales pudiesen cobrar las cuotas que aportaban los asalariados. Para los obreros, la legislación fue peor: estableció la posibilidad de ampliar el número de sindicatos por fábrica, destruyendo la organización por rama de industria y les prohibió expresamente la práctica de cualquier actividad política en dicho ámbito. De manera simultánea, la cartera del área, encabezada por Solá, se acercó a los dirigentes opositores de la central laboral por medio de la firma de laudos arbitrales, beneficiándolos con aumentos salariales.

Por otro lado, durante el segundo semestre de 1965 y el primero de 1966, se agravó el enfrentamiento entre el líder metalúrgico y el general Perón. La pugna tuvo, en esos

meses, una fuerte repercusión en el país; máxime, ante la derivación de dos asuntos conexos. El primero de ellos se originó con el arribo, en octubre de 1965, de María Estela Martínez (Isabel) como esposa y delegada del ex presidente; su llegada abrió un abanico de incertidumbres acerca del probable retorno de su marido. El segundo se relacionó con la posibilidad de que el movimiento, conducido por los representantes gremiales y enfrentados con el jefe del justicialismo, formase un partido que se alejase de las concepciones del ex primer mandatario desterrado en Madrid.

La respuesta de los representantes laborales a estos dos grandes frentes de tormenta fue la usualmente empleada en el período. Por una parte, se convocó a la ejecución de la quinta etapa del Plan de Lucha en los meses de mayo y junio de 1965, que consistió en el cumplimiento de una serie de concentraciones y manifestaciones callejeras donde se criticó la política económica de Illia. Varias de estas movilizaciones concluyeron en fuertes enfrentamientos con la policía: la más grave finalizó con el asesinato de los obreros José Mussi, Norberto Retamar y Néstor Méndez durante el paro general de cuatro horas decretado por la central obrera el 21 de octubre. Luego de esta medida de fuerza, producto de los incidentes ocurridos, la cúpula gremial convocó a la realización, entre el 22 y el 27 de noviembre, de una “Semana de Duelo y de Protesta”; ésta, por su contenido y sus características, fue un simple gesto simbólico. La CGT, simultáneamente, no descuidó las negociaciones y los diálogos con los disímiles grupos de poder; en particular, con los altos mandos castrenses. La mayoría de los analistas, tanto contemporáneos como posteriores, concuerdan en que durante esos meses se hizo más estrecho el vínculo entre los sectores golpistas y la dirigencia laboral. Paralelamente a estas negociaciones, durante el último trimestre de 1965 y los primeros meses de 1966, hubo una reveladora cantidad de medidas de fuerza.

Todos estos sucesos no llegaron a opacar el abierto enfrentamiento producido en el seno de la CGT durante el mes de enero de 1966. Los debates en el justicialismo, agravados por la presencia de Isabel Perón, cobraron forma de ruptura dentro de la central sindical cuando se constituyó un sector de las 62 Organizaciones autodenominado “De Pie Junto a Perón”. Su nombre provino del título de una solicitada publicada en los medios de prensa el 18 de enero. La solicitada expresaba el “acatamiento incondicional” al general exiliado, se reconocía como su “única” representante en el país a “Isabel”, se aceptaba al “Comando Superior Delegado” y se desconocía a los miembros de la “Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones” que se habían “alzado” contra Perón. El comunicado estuvo respaldado

por diecinueve sindicatos, entre otros, Vestido, Caucho, Calzado, Ceramista, Naval, Jaboneros, Sanidad, Tabaco, Mecánicos, Textil, Farmacia, Azucareros. A esta agrupación, encabezada por José Alonso, se le añadió una parte ostensible del aparato político partidario, desde Jorge Antonio y Raúl Matera, pasando por grupos provinciales neoperonistas, hasta sectores como el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara y el Movimiento Nueva Argentina. Como respuesta, la Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones y la UOM publicaron, por separado, solicitadas en respaldo al dirigente metalúrgico; a la vez, rechazaron las acusaciones por suponerlas “falsas y tendenciosas”. Esta fracción estuvo constituida por los gremios de la Alimentación, Molineros, Cuero, Carne, Metalúrgicos, Petroleros, Municipales, Fideeros, Gastronómicos y Telefónicos, junto con un número importante de diputados nacionales, los gobernadores del Chaco, Neuquén y Jujuy e intelectuales como Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde.

El corolario inmediato de esta situación fue la expulsión de Alonso y de las asociaciones profesionales firmantes de la solicitada del día 18. En plena disputa hubo una serie de mutuas acusaciones públicas entre los bandos. Las “62 Organizaciones de Pie junto a Perón” acusaron al vandomismo, entre otras cuestiones, de haber llevado al fracaso el Operativo Retorno en 1964 y la paralización del Plan de Lucha. Por su parte, la Mesa Coordinadora Nacional le respondió que eran un “minúsculo grupo de dirigentes” con “una desviación ideológica de realineamientos trotskistas disfrazados de peronistas”, dedicados a la “importación de doctrinas extrañas”.¹⁹ En vista de esta situación, el Consejo Directivo de la CGT eligió a Fernando Donaires (Papeleros) como secretario general hasta la reunión del Comité Central Confederal. Una vez reunido éste, en el mes de mayo, y con el apoyo de algunos gremios Independientes y el Movimiento de Unidad Clasista Sindical (MUCS), se nombró un nuevo cuerpo directivo provisorio encabezado por Francisco Prado. Análogamente, el enfrentamiento continuó por otro carril; alcanzando su máximo nivel de expresión en las elecciones provinciales de abril de 1966 en Mendoza. En dichos comicios, el candidato avalado por Vandor (Alberto Serú García) perdió ante el candidato demócrata (conservador) y salió cuarto, después de Enrique Corvalán Nanclares, quien había sido propuesto desde Madrid.

Poco tiempo, antes que se extendieran estos enfrentamientos en el seno del justicialismo, ya habían comenzado los aprestos de un nuevo golpe de Estado. Como coinciden los investigadores del período, el movimiento militar contó con una anticipada

¹⁹ *La Razón*, 28 de enero y 13 de marzo de 1966.

preparación de la opinión pública. Las elecciones en Mendoza generaron una visible preocupación en los sectores antiperonistas de la sociedad. Los futuros comicios de 1967 despertaban una desmedida alarma, ya que traían a la memoria el espectro de marzo de 1962. También, como secuela de los acontecimientos de la provincia andina, se arribaron a otras conclusiones. La vertiente conducida por Vandor, ante la imposibilidad de alterar su relación de fuerzas con Perón, estrechó los vínculos con los oficiales Azules del Ejército. De esta manera, la cúpula gremial no perdió ocasión para sumarse a la campaña de desprestigio contra el Poder Ejecutivo. No sólo los sectores sindicales dentro del peronismo propiciaron el derrocamiento de Illia; el aparato político justicialista, desde los inicios del gobierno radical, pensó en esa posibilidad.

Mientras tanto, la clase obrera continuó protagonizando numerosas medidas de fuerza. En los primeros cinco meses del año, la renovación de los convenios colectivos motivó la ejecución de varias protestas o sólo su advertencia. El diario *La Razón* publicaba, en forma alarmante, que “casi no transcurre un día” sin que “la población se informe de actos de sabotaje”, ocasionando “incalculables pérdidas” para el país. No siempre fueron sabotajes, también hubo paros por veinticuatro horas, ceses de tareas parciales y sorpresivas, junto con distintos tipos de trabajo a desgano. Casi todas las luchas se radicaron en empresas estatales. En segundo lugar, las demandas se concentraron en defensa de la fuente de trabajo ante el incremento de las suspensiones y los despidos: el desempleo había mostrado un aumento comparado con el año anterior. A pesar del horizonte recesivo, continuaron produciéndose enfrentamientos originados en solidaridad con trabajadores que se hallaban en dificultades; los treinta y cinco mil metalúrgicos de la filial Avellaneda concretaron un cese general de actividades por veinticuatro horas en apoyo al personal de Sigma, Termec, Siam Di Tella Automotores, Kaiser, Hoesch Argentina y Siam Electrodoméstica, entre otras firmas. En este contexto, importantes sectores empresariales solicitaron al presidente “poner fin a actividades que producen un retroceso inadmisibles”; si esto no era factible, se debía alcanzar “otro medio” para “restablecer la disciplina”.

En medio de este panorama, la central sindical convocó a una huelga general de veinticuatro horas el 7 de junio en repudio a la actitud del gobierno de vetar las reformas introducidas a la Ley 11.729 de Contrato de Trabajo. Ante la sanción de la norma legal, el Poder Ejecutivo vetó las modificaciones que introducían mejoras para los trabajadores. Las “62 Organizaciones de Pie junto a Perón” y varios centros universitarios adhirieron a la convocatoria de la CGT. Con la excepción de los sectores mercantiles y financieros, el paro

tuvo un alto índice de acatamiento; sobre todo, en los centros industriales. La medida de fuerza sirvió, por un lado, para canalizar el descontento manifiesto durante esos meses en los organismos existentes; a su vez, permitió consolidar las negociaciones de la jefatura gremial con el futuro régimen pretoriano.

IX.

Sin embargo, en forma creciente, los hombres de negocios y las Fuerzas Armadas observaban la situación con preocupación.²⁰ Las distintas políticas laborales del gobierno de Illia habían terminado en un rotundo fracaso. Como se ha sugerido, las permanentes ocupaciones fabriles (algunas de ellas planificadas y centralizadas) y las reiteradas protestas sindicales, pese a que los dirigentes gremiales no anhelaban metas revolucionarias, habían generado por su propia dinámica una “extraordinaria capacidad de movilización” y una “preocupante espontaneidad”, mostrando a una clase obrera que

“podía movilizarse coordinadamente en direcciones objetivamente antagónicas contra los intereses de clase de la burguesía y que insinuaba fisuras en la dominación social.”²¹

En síntesis, por detrás de estos temores (un incremento de la presencia política del justicialismo en los comicios de 1967 y el aumento de la agitación social) existieron otros factores estructurales, que se remontaban a mediados de la década de 1950, que no habían sido resueltos. Era evidente que la inestabilidad reinante respondía a un desequilibrio de fuerzas que se hallaban desatadas desde el golpe septembrino de 1955 y que aún no habían sido posibles de encauzar. A este cúmulo de dificultades se superponía otra preocupación que, en última instancia, incidía sensiblemente. Desde hacía más de una década que la clase dominante no lograba estabilizar la situación económica y política mediante un proyecto coherente de acumulación de capital y de inserción en la nueva división internacional del trabajo surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Para alcanzar tales fines, debía imponerse sobre el movimiento obrero, alinearse en forma unificada, alrededor de un

²⁰ Según un observador contemporáneo:

“La ocupación de fábricas, los rehenes, los paros sorpresivos, los 10 millones de cartas detenidas, y los 400.000 telegramas sin repartir, el paulatino desborde de quienes interpretaban el plan de lucha de la CGT, pivote del cambio de estructuras y el medio para modificar la base del sistema económico capitalista por el de la propiedad colectiva de los medios de producción, conducían fatalmente al golpe.”

Carlos Fayt. *El político armado. Dinámica del proceso político argentino (1960/1971)*. (Buenos Aires: Pannedille, 1971), p.14.

²¹ Guillermo O'Donnell. *Op.Cit.*, p.77.

único proyecto “modernizador”. De ahí que el alcance y el significado de esta nueva intervención militar liderada por el general Juan Carlos Onganía contraste, de manera específica, con los golpes de Estado precedentes.